



OFENSIVA EMPRESARIA, AUSTERIDAD FISCAL Y RELANZAMIENTO GUBERNAMENTAL: LA “NUEVA NORMALIDAD” A UN AÑO DEL GOBIERNO DEL FRENTE DE TODXS

Boletín de Coyuntura | Noviembre 2020

Consideraciones generales

1.

Promediando noviembre la pandemia de Coronavirus ocupa un lugar central en la agenda pública, pero ya lejos de la exclusividad que supo tener hasta apenas un par de meses atrás. La estabilización de la cantidad de casos en todo el país y la merma sostenida en la Caba y el Conurbano bonaerense son los datos que resumen la situación. La aplicación del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio en el AMBA y la confirmación de la temporada turística de verano ratifican ese cuadro y prefiguran la tan mentada nueva normalidad. Habiendo evitado situaciones de desborde, después de robustecer el sistema sanitario y de adoptar a tiempo medidas de aislamiento, Argentina se ubica sin embargo entre los países con más muertes por millón de habitantes. Si bien las cifras acumuladas son sólo datos preliminares, son las mismas estadísticas comparativas en base a las cuales el Gobierno Nacional cimentó parte de la legitimidad acumulada en la primera mitad de la pandemia. Las gestiones del Ministerio de Salud para acceder a varias de las vacunas que están en proceso de aprobación y, particularmente, la noticia de que la vacuna rusa Sputnik V puede llegar a estar disponible antes de fin de año corrieron el eje y dejan mejor parada a la coalición gobernante.

2.

Producto de la combinación de la crisis económica que arrastra y de los efectos de la pandemia, Argentina entró al segundo semestre del año con un profundo empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población. La pobreza llegó a un 40,9% (más de un 10% por encima de la cifra registrada un año antes) y el índice de indigencia saltó del 7,7% al 10,5%. Mientras que la desocupación ascendió al 13,1%, el pico más alto desde 2004. Si bien se estima que esos datos, que recogen la situación del segundo trimestre, corresponden al piso de la caída de la actividad económica, describen una realidad que será difícil de revertir. Significan, además, un desafío extra para un espacio político como el Frente de Todos (FDT) que arribó al gobierno canalizando buena parte del descontento por los pésimos resultados económicos de su antecesor. En este contexto, la extensión de las tomas de tierras que tuvieron como epicentro a la Provincia de Buenos Aires, debe verse como el emergente más contundente de un proceso de pauperización de las condiciones de vida que golpea especialmente a quienes sólo acceden a empleos precarios o no registrados y viven del cuentapropismo. Más aún si son mujeres y jóvenes. Las políticas de asistencia estatal enfocadas en el acceso a la alimentación básica y a garantizar un piso mínimo de ingresos, sumado a la existencia de organizaciones sociales con una

sólida presencia en los territorios, explica en gran medida que en la crisis actual la demanda más visible sea la del acceso a una vivienda digna y no necesariamente la del acceso al trabajo y la comida, tan propias del período 2001-2002.

3.

Se ratifica un escenario en el que las disputas más relevantes están protagonizadas por dos grandes bloques. De un lado, las heterogéneas fuerzas sociales y políticas articuladas en torno al FDT y, del otro, los medios de comunicación dominantes, la derecha política, gran parte de la cúpula empresaria y de la corporación judicial que ofician como un bloque de actores que confluyen en la defensa de sus privilegios y persiguen el objetivo de debilitar y condicionar al Gobierno Nacional. Desde septiembre, la confrontación principal se desplazó al terreno cambiario, en el que sectores del capital financiero y las fracciones vinculadas al comercio exterior pugnan por imponer una devaluación brusca del peso. Sin embargo, no ha sido el único frente de batalla. Estos actores corporativos usaron sus medios de comunicación como plataforma para emprender una cruzada de repudio a las tomas de tierra por vivienda digna. Con la “defensa de la propiedad privada” como bandera principal, le demandaron al Estado una intervención ejemplificadora para poner a raya a “los usurpadores”. Una línea de intervención que asimismo pretendió instalar la idea de que se estaba gestando una huída masiva de empresas extranjeras. La calle siguió siendo otro escenario de disputas importantes. En este caso, se repitieron las acciones para presionar primero, y luego repudiar, a la Corte Suprema de Justicia por el caso de los jueces puestos en sus cargos por Macri a través de un decreto. La defensa de la República y la lucha contra el autoritarismo fueron las consignas principales de tales convocatorias.

4.

En cuanto a la derecha política, las apariciones públicas de Macri ponen en evidencia cada vez más claramente la disputa que existe por el liderazgo de Juntos por el Cambio. Cada vez más complicado judicialmente, el tándem Bullrich-Macri sigue alimentando al núcleo duro de su base social y comienza a sufrir cierto aislamiento interno. El distanciamiento de Carrió, su reaparición pública y su acercamiento al polo que representan Larreta y Vidal, es una de las novedades de las últimas semanas. Más allá de las diferencias que ambos sectores vienen demostrando, el llamado al diálogo planteado por la vicepresidenta Cristina Fernández en su carta del 26 de octubre volvió a ponerlas en evidencia. Mientras que el expresidente condicionó de un modo burdo cualquier proceso de acuerdo, Carrió intensificó sus movimientos, con el radicalismo, para que Juntos por el Cambio apoye en el Senado la candidatura de Daniel Rafecas como Procurador General.

5.

El gobierno del FDT llegará a su primer año de gestión en un escenario adverso. La corrida cambiaria y la negociación con el FMI marcaron el ritmo de los últimos meses, caracterizados a su vez por la agudización de los efectos sociales de la pandemia entre los sectores más vulnerables del pueblo trabajador y por la aparición de algunos signos de reactivación económica. En ese marco, el Gobierno se propuso resistir los intentos de imponer una devaluación brusca por considerar acertadamente que implicaría un golpe durísimo para los sectores populares e incluso para su propia legitimidad. Implementó una hoja de ruta que incluyó concesiones importantes a los sectores del poder económico y medidas orientadas a una mayor austeridad fiscal. Acciones cuyos efectos de mediano alcance son el corrimiento progresivo del papel protagónico que el Estado venía asumiendo en la asistencia social por la pandemia y la obturación -al menos por ahora- de una vía de salida de la crisis económica que implique avances, por lo menos parciales, sobre el poder material y simbólico de los sectores dominantes.

6.

Guiado por la premisa del Ministro Guzmán de “tranquilizar la economía”, el oficialismo transita esta compleja coyuntura proponiéndose un costoso equilibrio entre exigencias de distinto orden, que de conjunto responden mucho más a presiones por “arriba” que por “abajo”: la necesidad de destinar recursos para ponerle un piso al retroceso social generalizado y alimentar la recuperación de la actividad económica; las presiones del empresariado para liberar tarifas y precios y -como señalamos- concretar una nueva devaluación; los recursos necesarios para apuntalar a sectores productivos que generan más empleo e incentivar a los que permiten ahorrar o aumentar el caudal de divisas; y el ajuste que pretende el FMI para sellar un acuerdo que permita aplazar el pago de la deuda con ese organismo. El balance de los últimos meses no es positivo para las mayorías populares. Las concesiones logradas por los sectores del gran capital en el plano fiscal, financiero y simbólico pueden significar algo de aire en el corto plazo, aunque poco redituables para el Gobierno en el futuro.

7.

En simultáneo y progresivamente, el Gobierno ha dejado atrás “el modo cuarentena” y ha diversificado e incluso ampliado su nivel de iniciativa. Propone una agenda de la producción para la reactivación económica, aunque alejada de la senda que se había prefigurado en el discurso del presidente cuando, al inicio de la pandemia, hablaba del “momento del Estado” y en acciones como el intento fallido de expropiación de Vicentín e incluso del DNU que define como servicios públicos a internet, la telefonía móvil y la TV paga. La impronta que se deja ver en la puesta en marcha del Acuerdo Económico y Social y la activación de mesas de trabajo con entidades empresariales y sindicatos, es la de un Estado más regulador y facilitador de la actividad privada que artífice fundamental de la salida de la crisis en base a una mayor capacidad para imponer condiciones al

gran capital. También se puede ver allí el marcado protagonismo de los actores principales de la cúpula empresarial en detrimento de los sectores pyme, de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales. Lo que a su vez implica un énfasis puesto en la reactivación y el crecimiento que deja en un segundo plano al problema de la distribución, poniendo en riesgo el alcance mismo de un ciclo económico virtuoso y generando condiciones para que, a la salida de esta nueva crisis, quede en pie una estructura económica más concentrada y desigual. En este contexto el impuesto extraordinario a las grandes fortunas constituye una acción muy significativa, pero corre el peligro de quedar como una medida aislada.

8.

El escenario muestra una paradoja. El Gobierno del FDT está, en gran medida, acosado por gran parte de las corporaciones económicas, mediáticas y judiciales, que en el último tiempo han logrado condicionar parte de sus políticas más relevantes. A la vez, mantiene un respaldo de una base social amplia y diversa, que por ahora tiene asignado un rol expectante, y a la que en términos globales no termina de retribuir. Lejos de la realidad que reza el slogan presidencial, “Argentina unida”, el país vive una nueva crisis económica y una situación de marcada confrontación. Si en agosto el Gobierno tomó medidas que lo subieron al ring para intercambiar golpe por golpe, poco después volvió sobre sus pasos ante las presiones del poder económico y la inminencia de las negociaciones con el FMI. Así, a un año de asumir, el oficialismo persiste en su apuesta por construir un nuevo pacto social. Orientación que en el último mes -dando señales inocultables de debilidad pero también en clave de advertencia- cuenta con el aval explícito de CFK.

9.

La crisis en curso todavía puede derrumbar la legitimidad del Gobierno. A pesar de haber asumido un camino de mayor austeridad, luego del refinanciamiento de la deuda con los acreedores privados, el oficialismo cuenta con una masa importante de recursos para atender situaciones urgentes. Aunque ha quedado muy condicionado por la frágil situación cambiaria y financiera, necesita también construir un margen de acción mayor para dar respuesta a demandas de los sectores que son base de sustentación del FDT. Además del aporte solidario de las grandes fortunas, el anuncio de la ampliación de la AUH, la definición por darle una nueva impronta al Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat, los cambios en la Ley de uso del fuego, la asunción de buena parte de la agenda feminista y el envío del proyecto para la legalización del aborto al Congreso, parecen ir en esa dirección.

10.

La presentación en el Parlamento del proyecto de ley para la legalización del aborto por parte del presidente supone un hecho político en sí mismo. Por la fuerte oposición que genera en sectores religiosos, por ser una de las principales promesas de campaña y por el significado histórico que tiene para el movimiento feminista. De aprobarse, podría convertirse en un hito distintivo para la presidencia de AF.

11.

La presión devaluatoria por parte del capital financiero y los sectores exportadores del gran capital y la negociación con el FMI seguirán rigiendo el día a día y el corto plazo. No obstante, en el horizonte aparecen algunos elementos que llevan a la coalición gobernante a mirar el futuro próximo con relativo optimismo. La posibilidad de empezar a vacunar contra el Covid-19 a fines de este año a lxs trabajadorxs esenciales y grupos de riesgo, gracias a la llegada de la vacuna rusa, se suma a los incrementos en la actividad industrial y en la recaudación registrados a partir de septiembre. Más allá de algunos debates y de las disputas internas lógicas que atraviesan a un espacio tan heterogéneo, en el FDT no aparecen signos que presagien escisiones de relevancia. Finalmente, el triunfo del MAS en Bolivia fue un espaldarazo directo para el gobierno argentino y el primer síntoma de un posible cambio de tendencia en la región que se terminará de ver en los próximos meses.



Parte 1. El Gobierno del Frente de Todxs entre la corrida cambiaria, el “ordenamiento fiscal” y el impuesto a las grandes fortunas.

El gobierno del Frente de Todxs (FDT) cumple su primer año de gestión en un escenario cambiante y complejo. Lejos de generar un momento de mayor concertación y diálogo, la pandemia dio paso a una dinámica política y económica caracterizada por la confrontación. En la segunda parte de este 2020 el oficialismo alternó momentos de desorientación con otros en los que pudo recuperar la iniciativa, aunque lejos de lograr imponer condiciones por un tiempo prolongado. Sin poder concretar su premisa de avanzar por el sendero del diálogo y la concertación entre los principales actores económicos, sociales y políticos del país, con el Estado como gran articulador y garante, su estrategia principal quedó a mitad de camino. De todos modos, el análisis de lo ocurrido en los últimos dos meses da cuenta de que esa estrategia sigue en pie y explica buena parte de las acciones más relevantes de la coalición gobernante.

La crisis económica agravada por la pandemia ha golpeado muy fuerte en los sectores más vulnerables del pueblo trabajador y en gran parte de las pequeñas y medianas empresas. Los datos de pobreza y desempleo llegaron a mitad de año a los niveles máximos de la última década y media. Algo que supone un desafío extra para un espacio político que accedió al gobierno canalizando el descontento por los resultados económicos de su antecesor y levantó la consigna de “primero los últimos”.

En este marco, los medios de comunicación dominantes, la derecha política, gran parte de la cúpula empresaria y de la corporación judicial mantienen una oposición sistemática con el objetivo de debilitar y condicionar al Gobierno Nacional. Más allá de las posturas ideológicas y de los intereses históricos que ligan a esos grupos privilegiados, lo que está en juego en la coyuntura actual es sobre qué espaldas recaen los costos de la profunda crisis que está en curso y si hay margen para una salida que imponga condiciones más regresivas para las mayorías.

El Gobierno parece corrido del rol que enunció a comienzos de la cuarentena cuando Alberto Fernández sostuvo que “era el momento del Estado” y que en medio de semejante debacle las posibilidades de reactivación iban a depender de amplificar el volumen de su intervención para defender el empleo y apuntalar el mercado interno. El exiguo aumento aplicado en el salario mínimo vital y móvil y en los salarios del sector público; la falta de actualización de los montos en el IFE, su aplicación bimensual y el anuncio de su interrupción; la definición de no seguir emitiendo moneda y compensar el déficit fiscal con endeudamiento; y la poda de los gastos de

asistencia por la pandemia en el presupuesto 2021 en nombre de un “ordenamiento fiscal”, marcan un camino de austeridad y abren un gran interrogante para el futuro próximo.

En momentos en que desde el oficialismo se pretendía dar señales fuertes de un relanzamiento que dejara a las urgencias generadas por la gestión de la pandemia en un segundo plano, en septiembre se consolidó la corrida contra el peso promovida por sectores del gran empresariado para imponer una devaluación brusca. Desde entonces, ese hecho marcó el pulso de la coyuntura y concentra la atención del equipo gubernamental.

El acuerdo que el Gobierno Nacional está negociando con el FMI es otro factor clave para entender su gestualidad y sus acciones. Incluso desde antes de asumir, Alberto Fernández colocó al proceso de renegociación de la deuda externa como un paso necesario para poner en pie la economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que pedirá un programa de facilidades extendidas que supondrá un acuerdo de metas fiscales, monetarias y financieras. En un contexto de necesidades mayores a las previstas, no hay que descartar incluso que la estrategia del Gobierno incluya un pedido de fondos al FMI o a otros organismos multilaterales. Una vez más, habrá que preguntarse por cuáles serán los condicionantes.

En medio de un panorama global que sigue siendo sombrío, el oficialismo se apoya en algunos hechos para mirar el futuro próximo con un moderado optimismo. Desde la posibilidad de comenzar en pocas semanas con un gran [plan de vacunación](#) contra la Covid-19 hasta los signos de recuperación industrial registrados luego de un segundo trimestre caracterizado por un desplome generalizado. Pasando por la tendencia alcista en el precio de la soja, la unidad que se percibe en el frente gobernante, que más allá de algunos debates internos no muestra peligros de escisiones, y el triunfo del MAS en Bolivia, que aporta un gobierno aliado en la región y legitima la política que el FDT se dio hacia Evo Morales y otros dirigentes de ese país a los que les dio asilo. Todos aspectos cuyo desarrollo serán cruciales en los meses que vienen.

De la corrida cambiaria al acuerdo con el FMI

Una vez que la pandemia de coronavirus dió paso a las medidas de emergencia, los objetivos y las políticas que el Gobierno Nacional delineó en el frente económico y financiero pueden sintetizarse de esta manera. (1) Asistir, sobre todo mediante la emisión monetaria, a los trabajadores formales e informales y a las empresas afectados por la pandemia para contener la destrucción de puestos de trabajo, apuntalar el mercado interno y lograr una reactivación lo más pronto posible; (2) congelar

tarifas y garantizar precios máximos para que no se dispare la inflación ni se genere una crisis social más profunda; (3) mantener los controles de cambio e implementar microdevaluaciones para no tener problemas con el valor del dólar, cuestión que en Argentina no remite sólo al plano económico sino también a la estabilidad política. Para la aplicación de esa hoja de ruta el Gobierno apeló a la negociación con -y entre- las entidades empresarias y las organizaciones gremiales.

En los últimos dos meses, ese esquema de objetivos y acciones comenzó a alterarse producto de presiones que se despliegan mucho más por “arriba” que por “abajo”. Así como sectores exportadores y del capital financiero redoblaron la apuesta por una devaluación, las empresas de servicios públicos presionan por aumentos en las tarifas y las que producen bienes y servicios esenciales pretenden una liberalización de los precios. Las negociaciones abiertas con el FMI es clave para entender el escenario de operaciones, todo indica que la estrategia del oficialismo es hacer “buena letra” antes para que figuren pautas menos coercitivas en el acuerdo. En simultáneo, el gobierno ve en los primeros signos de reactivación la posibilidad de aligerar la carga sobre los recursos estatales. La impronta del presupuesto 2021, que contempla una apuesta por bajar drásticamente el déficit fiscal a partir de la poda de los “gastos Covid-19” y una módica actualización en jubilaciones y salarios del sector público, también responden en gran medida a esa estrategia. La definición de frenar la emisión de pesos tiene un efecto en la pretensión de achicar el déficit fiscal y a su vez en la búsqueda de aminorar la demanda de dólares “ahorro” que en muchos casos se vuelcan al paralelo aprovechando la ampliación de la brecha.

En los últimos dos meses, la política para contener la corrida contra el peso y evitar una devaluación brusca se transformó en el objetivo principal y más inmediato del oficialismo. Con la premisa de que una brusca devaluación del peso significaría otro terrible golpe para los sectores populares, hay que decir que el Gobierno del FDT se mantuvo firme en esa posición.

Su política, no obstante, se mostró errante y evidenció diferencias en el equipo económico. En un primer momento apuntó a engrosar las reservas del Banco Central estableciendo [más regulaciones](#) para el acceso al dólar y medidas para [alentar las exportaciones](#) y la rendición de las divisas por parte de los agroexportadores. El presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la Vicejefa de Gabinete, [Cecilia Todesca](#), fueron las caras visibles de esa orientación. Sin resultados positivos en el intento por achicar la brecha entre la cotización del dólar oficial y las operaciones paralelas legales e ilegales (contado con liquidación, dólar bolsa y blue), en un segundo momento, el Gobierno cambió de estrategia. Pasó a privilegiar la implementación de [instrumentos de inversión](#) (bonos de deuda en dólares y en pesos atados a la cotización oficial) para que actores locales y extranjeros que operan en el sistema financiero se corran de las operaciones especulativas con el precio del dólar y apunten a otro tipo de [operaciones](#). A la cabeza de esta segunda línea de acción está el Ministro de Economía, Martín Guzmán, quien logró -al menos por ahora- contener la situación y de esa manera apuntalar su capital específico en el equipo gobernante.

Entretanto, desde el Gobierno Nacional nunca se abandonó ni el discurso ni la disposición a construir acuerdos con la cúpula empresaria, aunque ese camino no había tenido los resultados pretendidos. Agosto había marcado un hito contradictorio en esa relación puesto que en pocas semanas, el oficialismo había aprobado una ley para regular el teletrabajo, decretado el carácter de servicio público de internet, la telefonía celular y la TV por cable, y había enviado al Congreso el proyecto del impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Todas medidas que no contaron con el beneplácito empresario o que incluso generaron un rechazo explícito.

Cuando las pujas abiertas en el plano cambiario, de precios y tarifas, sumadas a la inminencia de la negociación con el FMI reacomodaron el tablero, la estrategia oficial consistió en dar señales inequívocas de que estaba resuelto a no ceder ante la presión devaluatoria, pero a su vez dio pasos contundentes para demostrar que estaba dispuesto a negociar e incluso hacer concesiones en otros planos. La carta pública circulada por Cristina Fernández el 27 de octubre vino a bendecir —entre la debilidad y la advertencia— una línea de acción que está en el origen mismo de la conformación del FDT y de la candidatura de Alberto Fernández. Desde ese doble punto de referencia —estrategia original y urgencias del momento— hay que analizar la reunión entre el ministro Guzmán y [los representantes de AEA](#), las mesas de trabajo con las principales cámaras empresarias —donde se discute por ejemplo una nueva ley para promover [las exportaciones del agro](#)— e incluso las reuniones personales que el presidente viene manteniendo con empresarios clave.

“Tranquilizar la economía”, esa expresión terapéutica utilizada tantas veces por el ministro Guzmán puede resumir bien la dirección que el gobierno le imprimió a sus acciones en este contexto. De “ponerse al hombro la reactivación” pasó a dar por garantizado un piso de contención en medio del retroceso social y económico y a apuntalar desde un papel más subsidiario la reactivación de los sectores más dinámicos. En paralelo, se esmeró en dar señales de que no habrá derroche y de que primará el equilibrio en el manejo de los recursos. La premisa de “tranquilizar la economía” está en la base de las [declaraciones](#) que intentan desalentar —al menos por ahora— las expectativas de recomposición salarial, la aplicación de [la fórmula](#) de actualización de las jubilaciones que —en un contexto de alza de precios— no contempla el índice inflacionario y, como ya señalamos, la definición de llevar al mínimo posible la [emisión monetaria](#). No obstante, ese hilo conductor también llega hasta otro tipo de definiciones, como la dilación del tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, y de medidas como el desalojo violento a la toma de tierras de Guernica (y muchos otros). Aunque transite por otro carril, la señal de ese hecho fue contundente: no hay lugar para los desbordes ni para dudar sobre el respeto a la propiedad privada.

La agenda de la producción y la reactivación económica

Mientras daba pelea contra la corrida cambiaria, el Gobierno Nacional trató de construir una agenda vinculada a la producción y el crecimiento con la idea de apuntalar la reactivación de las actividades que pueden ser motor de un repunte sostenido de la economía. Para eso desempolvó la fórmula del Acuerdo Social y Económico, propuesta en campaña por Alberto Fernández, presentó los lineamientos básicos de las políticas públicas que pretende aplicar, delineó planes de fomento en áreas clave y tomó definiciones para proyectar la “nueva normalidad”, colocando en un lugar muy relevante a la próxima temporada turística de verano.

El 19 de octubre el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni encabezaron la presentación del [Acuerdo Económico Social](#) junto con cien empresarios y dirigentes sindicales. Los términos que más se repitieron en los discursos de ambos funcionarios fueron: “desarrollo”, “crecimiento”, “acuerdos”, “diálogo” y “previsibilidad”. En ese marco también se pusieron en marcha una serie de mesas de trabajo sectoriales.

Entre los asistentes se destacaron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y portavoz del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Ivan Szczech; el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Fernández; el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja; el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y su par de la CTA, Hugo Yasky.

En el encuentro se presentaron [diez puntos](#) de consenso sobre los cuales Estado, empresarios y sindicalistas se comprometen a trabajar de acá en adelante: exportar más, para generar más divisas y financiar el crecimiento económico; ningún sector productivo sobra, todos son importantes; mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; no hay futuro sin políticas productivas; ninguna política productiva será sustentable sin dimensión ambiental; una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; sin mejorar la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; una buena política productiva debe reducir las brechas de género; la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente; toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

Cabe señalar el protagonismo que en dichas iniciativas y eventos vienen teniendo las entidades que nuclea al gran empresariado en detrimento de sectores pequeños y medianos, que son los que más empleo generan. Por otra parte, tiene sentido

indicar que el retiro progresivo de los programas de asistencia para trabajadores formales e informales -IFE Y ATP- puede dificultar en los hechos la tenue recuperación económica que está en marcha. En las últimas semanas el Gobierno Nacional anunció dos decisiones que sirven para ilustrar cómo piensa el rol del Estado en esta nueva etapa y muestran el tipo y el volumen de asistencia prevista de aquí en adelante. Mediante un [DNU](#), el presidente Fernández extendió la prohibición de despidos y suspensiones en el sector privado hasta enero inclusive. En tanto, el Ministerio de Trabajo anunció el relanzamiento del [Programa de Recuperación Productiva](#) (REPRO II), que entregará \$9000 por cada trabajador/a de empresas en crisis, que no efectúen despidos.

Entre las iniciativas que el Gobierno impulsó para favorecer las inversiones en sectores estratégicos hay que destacar la llamada [Ley de economía del conocimiento](#) y el [Plan de promoción para la producción de gas](#). Dicha ley, aprobada pese al rechazo de Juntos por el Cambio, establece mecanismos de fomento que varían según se trate de empresas pequeñas, medianas y grandes, dedicadas al software, servicios informáticos y digitales, la biotecnología, y la industria aeroespacial y satelital, entre otras. El llamado “Plan Gas 4” pretende aumentar fuertemente la producción para evitar un fuerte incremento en la importación de gas licuado que podría producirse a causa del parate de la actividad productiva de la crisis económica y apunta a atraer inversiones privadas para desarrollar todas las cuencas del país y, en especial, Vaca Muerta. Con este objetivo el Ministerio de Economía puso en marcha una [agenda de acuerdos](#) con sindicatos y las cámaras involucradas en la actividad. El Estado Nacional destinará una masa importante de subsidios (incluidos en el presupuesto) e YPF tendrá un rol central.

Durante el último mes desde el Ejecutivo Nacional se dieron a conocer los [protocolos](#) para habilitar la actividad gastronómica, artística y hotelera en los destinos turísticos de todo el territorio. En ese contexto, quedó permitida la entrada al país de turistas provenientes de países limítrofes y los vuelos interprovinciales. Más allá de las evaluaciones respecto de que para el verano se contará con la vacuna contra el Covid-19 y de las proyecciones que indican una merma en el ritmo de los contagios en casi todo el país, no hay dudas de que en estas disposiciones hay mucha valoración económica dado que están involucradas actividades que fueron profundamente dañadas por la pandemia y están implicadas muchísimas [ciudades](#) en las que [el turismo](#) está entre sus principales fuentes de ingresos. En efecto, desde el Ministerio de Turismo no sólo se viene regulando el proceso de habilitación, sino que también se han impulsado [herramientas](#) para fomentar los viajes por vacaciones.

Reactivar al Gobierno

Hace al menos dos meses que la gestión de la pandemia dejó de ocupar el lugar prioritario que tuvo hasta entonces en el discurso, las acciones y la agenda del Ejecutivo. AF empezó a recorrer el país para mostrar un Gobierno activo, dejó atrás las filminas y abundaron los anuncios y las inauguraciones de obras públicas y privadas.

Entre los elementos que le dan sustento a ese cambio de impronta, hay que ubicar a las actividades que se dieron en el marco del 17 de octubre. La coalición de gobierno, y en especial la figura de AF, se fortalecieron porque pudieron mostrar un apoyo callejero que hasta ese momento se había aplazado en medio del debate por las movilizaciones anti-cuarentena y porque -más allá de las disputas esperables- hubo señales de unidad en el peronismo.

El vacío que implicó la ausencia de CFK en el acto realizado en la CGT se llenó días más tarde con su carta del 26 de octubre. A su modo, respaldó al presidente, enfatizando que los aciertos y errores son responsabilidad suya. Además remarcó que la necesidad de establecer acuerdos con los principales actores del poder económico no es sólo una idea de AF y su equipo económico. Como en otras apariciones, la mezcla de ambigüedades y certezas le permitió dejar contenidos a los distintos sectores de su espacio político y generar un debate mediático que se extendió durante días.

El gobierno viene diversificando y ampliando su iniciativa, pero no logra sostener temas en la agenda pública. Las medidas que representan mejoras concretas y/o acciones significativas para una parte importante de su base social han tendido a diluirse en medio de un contexto social y económico tan desfavorable. Pero tampoco son objeto de un trabajo comunicacional y pedagógico suficiente. Vale mencionar lo ocurrido con la definición de internet, la telefonía celular y la TV paga como servicios públicos, con el aporte extraordinario de las grandes fortunas o con [la incorporación de casi un millón de niñxs](#) a la AUH.

En ese marco contradictorio, el oficialismo pretendió hacer del 17 de noviembre un momento de quiebre. El haber avanzado con el tratamiento en Diputados del proyecto que [grava por única vez](#) a las principales fortunas del país y con la [reforma a la Ley de manejo del fuego](#), en simultáneo a la [presentación del proyecto](#) para legalizar el derecho al aborto, intenta mostrar a un Gobierno fortalecido y con margen de maniobra. El hecho de que haya sido una apuesta con movilización callejera incluida, refuerza ese mensaje hacia propios y ajenos.

El impuesto extraordinario a las grandes riquezas incluye pautas para la utilización de los recursos recaudados. Se destinarán a seguir haciendo frente a la pandemia, a subsidios para jóvenes, a urbanizar barrios populares y a apuntalar la producción de combustibles. Más allá de eso, puede ser el primer paso para discutir una reforma progresiva en el sistema tributario. Los cambios introducidos a la Ley de uso del fuego impondrán fuertes regulaciones para desalentar los incendios intencionales.

Es una norma fomentada desde [colectivos y organizaciones ambientales](#). La aprobación de estas leyes fortalece al polo del FDT organizado en torno al liderazgo de Cristina, más aún es un espaldarazo para Máximo Kirchner, autor de ambos proyectos. La presencia de varios ministros en la sesión, intentó demostrar que el oficialismo había cerrado filas en estos temas.

La cuestión del derecho al aborto merece un párrafo aparte. En lo que va del año el Gobierno incorporó aspectos importantes de la agenda feminista y los tradujo en una serie de medidas que están en sus [primeras etapas](#) o en [proceso de aplicación](#). No obstante, la presentación en el Parlamento del proyecto de ley por parte del presidente supone un hecho político en sí mismo. Por los sectores religiosos que se oponen abiertamente, muchos de ellos aliados al gobierno del FDT y porque fue una promesa de campaña que de no cumplirse dañaría la credibilidad del gobierno entre una parte de su base. Dado que esta demanda ha sido uno de los pilares de la masividad alcanzada por el movimiento feminista en nuestro país -que de hecho ha sostenido la movilización para reclamar sobre este tema-, seguramente el debate en el Congreso será un momento crucial no solo para la coyuntura sino muy probablemente para el mandato presidencial de AF.

En la zaga del “relanzamiento”, hay que ubicar asimismo al primer cambio ministerial en el Gobierno del FDT. La asunción de [Jorge Ferraresi](#) al frente del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en lugar de María Eugenia Bielsa da cuenta de que los resultados de esa cartera estuvieron hasta ahora muy por debajo de lo pretendido y de lo que hubiesen permitido los recursos ya asignados. Además con el nombramiento del intendente de Avellaneda, el kirchnerismo suma una nueva figura bien propia al Gabinete.

En el frente judicial el oficialismo tiene planteada una batalla de largo alcance. Luego de que la presentación de su proyecto de Reforma (que ya cuenta la aprobación del Senado) generara rechazo público y *off de record* en instancias relevantes del Poder Judicial, el Ejecutivo [festejó como un triunfo](#) el fallo de la Corte Suprema que indica como transitorios los desplazamientos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Si bien la Corte no avaló la anulación que sancionó el Senado meses atrás, dejó peor parada a la oposición que pedía la ratificación de dichos jueces en los cargos que ocuparon luego de un DNU de Macri. Después de evaluar casi como un golpe institucional la aceptación del *per saltum* presentado por los camaristas a principios de octubre, esta definición de la Corte -que mostró divididos a sus integrantes- fue interpretada por el Ejecutivo como un gesto que busca calmar las aguas.

A su vez, el bloque del FDT en el Senado rompió el letargo en el proceso de [nombramiento del Procurador General](#). Hasta ahora ese nombramiento estuvo trabado por la postura de la oposición a avalar la candidatura de Daniel Rafecas. Desde el bloque de senadores del oficialismo se impulsa un cambio en la normativa que permitiría definir al jefe de los fiscales mediante mayoría simple y que el cargo deje

de ser vitalicio. La situación es realmente compleja. En una misma jugada se abrió un debate en Juntos por el Cambio y quedó en evidencia la falta de coordinación en el FDT, ya que el presidente Fernández insistió públicamente en que su plan A sigue siendo Rafecas.

Una agenda internacional revitalizada

Octubre fue el mes en que desde el gobierno se tendieron los puentes para gestionar la llegada de la vacuna rusa contra el Covid-19. Si bien no se comunicó oficialmente, [la relación](#) de Cristina con el presidente Vladimir Putin fue clave. A fines de ese mes, la vicepresidenta [se reunió](#) en su despacho del Senado con el embajador de Rusia en Argentina. A partir de ahí, en cuestión de días funcionarias del Ministerio de Salud viajaron a Moscú para encaminar el acuerdo. A su vez, se abrió [un canal directo](#) entre el presidente Fernández y su par ruso. A través de una comunicación quedaron en trabajar para reactivar los proyectos de Asociación Estratégica Integral que CFK rubricó en 2015.

En el plano regional, luego de los [debates internos](#) que generó el voto argentino en la ONU que condenó la situación de los derechos humanos en Venezuela, el triunfo del MAS en Bolivia constituye el otro gran dato de política internacional para el oficialismo. No sólo porque implica la asunción de un gobierno aliado en momentos de mucho aislamiento, sino porque el asilo político a Evo Morales y un conjunto de funcionarios bolivianos, otorgado en diciembre de 2019, fue tal vez la medida de política exterior más audaz y trascendente del gobierno del FDT. La [presencia de Alberto Fernández](#) en la toma de posesión de Luis Arce y en la partida de la caravana que llevó de vuelta a Evo Morales a su país demuestran que desde el gobierno argentino se trató de capitalizar al máximo esa definición y que apostará por un vínculo estrecho con Bolivia.

De acá en más, y en el marco del cambio de signo político del gobierno estadounidense, ciertas definiciones respecto de la política de integración regional van a adquirir una relevancia aún mayor. Con un panorama menos hostil por delante, el Gobierno del FDT deberá definir con más claridad qué iniciativas alentar y a qué espacios apostar. En particular, el Gobierno debería evaluar prontamente su continuidad en el Grupo de Lima.



Parte 2. Sindicalismo y movimientos sociales: del conflicto por tierra y vivienda a la movilización por el derecho al aborto.

El movimiento sindical

Las actividades del último 17 de octubre sirven como foto de [la situación](#) que vive el movimiento sindical en los que hace a sus dirigencias y agrupamientos de mayor peso. El evento fue multitudinario y federal. La idea inicial tuvo su origen en la conducción de la CGT, aunque una vez lanzada la convocatoria las acciones se diversificaron dando cuenta de las internas y del diferente poder de movilización con el que cuentan unos y otros sectores.

Un día antes, la fracción encolumnada con Luis Barrionuevo y Carlos Acuña realizó su acto conmemorativo frente al monumento a Juan Domingo Peron inaugurado por Macri. Así se ratificó el quiebre en el binomio Acuña-Daer. El dirigente de lxs trabajadorxs de estaciones de servicio viene criticando el vínculo con la Casa Rosada y el respaldo a las organizaciones sociales. El mismo 17 por la mañana el Frente Sindical para el Modelo Nacional encabezó la Caravana de la Lealtad, realizada pese a los cuestionamientos del Gobierno Nacional, que puso en la calle a miles de personas y mostró una vez más la capacidad de movilización de Camioneros y sus aliados, Daer, por su parte, ofició de anfitrión del acto central. Viene siendo el dirigente que más sintonía muestra con el presidente, algo que se observa en su asistencia perfecta a todos los eventos donde el Gobierno requiere de la presencia sindical. Si eso le alcanzará para conseguir el aval oficial para quedarse con la conducción de la CGT en 2021, es difícil de saber.

En ese marco, la primera reunión que hizo posteriormente el Consejo Directivo de la central sindical estuvo atravesada por el malestar con el Gobierno. La propia conducción cegetista hizo trascender que hubo quienes plantearon la necesidad de medidas de fuerza. Una parte de los motivos de ese descontento fueron expresados en un [comunicado](#) que planteó la preocupación por la próxima interrupción del IFE y el ATP y llama a "garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales". A esos motivos se suman [otros](#), que pasan por la falta de instancias de diálogo con la conducción política del FDT y la falta de claridad acerca de los gastos que deberían tener que enfrentar las obras sociales ante la vacunación por el Covid-19.

Desde el moyanismo y la Corriente Federal de los Trabajadores no tardaron en diferenciarse. Por un lado, el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, [Héctor Amichetti](#), aseguró que comparte las preocupaciones pero cuestionó "ese viejo estilo sindical de apretar públicamente para buscar alguna solución a otro tema". Por otro lado, [Pablo Moyano](#), Secretario Adjunto de Camioneros, respaldó al Gobierno y aseguró que "hubiera sido importante que [la CGT] reclamara durante el gobierno de Macri".

Respaldo que, por otra parte, se volvió a mostrar en la calle durante la jornada del [17 de noviembre](#), donde también confluyeron los sindicatos nucleados en las [62 organizaciones](#).

Evolución de las paritarias

Según [datos del ministerio de Trabajo](#), hay alrededor de 4,5 millones de trabajadores bajo convenio colectivo. Para el mes de octubre, el total de acuerdos paritarios firmados alcanzaba al 85% de los asalariados registrados bajo convenio. La particularidad de esta ronda de negociación es que sólo el 30% de las paritarias actualizadas se rubricó por un plazo anual (sólo el 25% si se considera el total del universo). Por fuera de las negociaciones ya cerradas quedaron las actividades más afectadas por la pandemia.

Como ocurre desde el comienzo de la pandemia, la mayoría de los sindicatos llevó adelante una estrategia que buscó mantener los puestos de trabajo haciendo concesiones en materia salarial.

En los últimos dos meses se concretaron algunos acuerdos significativos por su peso cuantitativo y por su carga simbólica y política.

El [Sindicato de Empleados de Comercio](#), que encabeza Armando Cavalleri, firmó con las cámaras del sector una retribución no remunerativa de \$5000 a pagar con los sueldos que van de octubre a marzo. El piso salarial del sector quedará así en \$50000.

Los trabajadores de la administración pública nacional van a recibir un aumento del 7% para el período octubre-diciembre, momento en el cual habrá una reapertura de las negociaciones. El gremio mayoritario, [UPCN](#), avaló el acuerdo mientras que [ATE](#) lo rechazó por insuficiente y encabezó una serie de medidas junto con FES-PROSA (Salud) y CONADU Histórica (Docentes Universitarios).

La [UOCRA](#), por su parte, selló un aumento del 33% con una primera cuota del 25% en noviembre al que se sumará otro 8% en febrero. Se trata del único gremio de peso que seguía con las negociaciones abiertas.

Hay que tener en cuenta que las últimas cifras aportadas por [el INDEC](#) señalan que en el segundo trimestre del año se destruyeron 3.750.000 puestos de trabajo y que, en lo que va de pandemia, los salarios en promedio acumularon una contracción en términos reales del 5,3%.

Un panorama más abarcativo de los meses anteriores se puede encontrar en nuestro anterior [boletín de coyuntura](#).

Conflictos por la tierra y la vivienda

Según datos oficiales el déficit habitacional en el país alcanza a un tercio de la población. De ese universo, de aproximadamente 3,5 millones de familias, se estima que el 40% (1,3 millones) necesita una nueva vivienda. A ese panorama hay que agregarle que alrededor de 5 millones de personas viven en los 4400 barrios populares (villas y asentamientos más o menos recientes) sin acceso garantizado a servicios básicos ni titularidad del suelo. De estas villas y asentamientos, 1700 pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, unos 1000 están en el Conurbano.

Promediando las medidas de aislamiento, se comenzó a dar un aumento en las tomas de tierras en el Gran Buenos Aires y La Plata. Indudablemente existe una relación directa entre la crisis económica agudizada por la pandemia y ese incremento. No obstante es importante [señalar algunas cuestiones](#) que ayudan a comprender este emergente social.

Vale remarcar que se trata de un fenómeno mucho más diverso del que construyen los grandes medios de comunicación que en general subestiman la heterogeneidad de factores que confluyen en las ocupaciones. Hay tomas pequeñas y tomas masivas. Algunas parten de cero y otras se enlazan con ocupaciones pre-existentes que experimentan un crecimiento. Si bien la acción represiva ha sido un común denominador, hay casos puntuales en los que la intervención estatal canalizó soluciones satisfactorias. Y, sobre todo, en las tomas de tierra intervienen actores muy distintos. Hay, en efecto, loteadores que fraccionan tierra cuya titularidad no poseen y redes ligadas a ciertas actividades delictivas que cuentan con algún tipo de complicidad con las fuerzas de seguridad y redes políticas locales. Pero también existe una densa red de organizaciones sociales, políticas y religiosas que promueven proyectos habitacionales y que son la principal instancia de contención contra especuladores y loteadores.

Por su extensión y la complejidad de intereses que involucró, la toma de Guernica se transformó en un [caso paradigmático](#). Protagonizada por más de 1500 familias, la ocupación evidenció la existencia de lazos fuertes entre el gobierno comunal, grandes especuladores inmobiliarios y sectores del Poder Judicial. Puso en escena a diversas organizaciones sociales, con orientaciones políticas y tamaños muy

distintos. Fue escenario de una estrategia contradictoria por parte del Gobierno Provincial que mantuvo durante un tiempo prolongado una negociación con organizaciones sociales, delegados de la toma y organismos de derechos humanos, con el objetivo de promover una resolución política y no represiva del conflicto, y que terminó intempestivamente ejecutando un desalojo violento.

Una mirada más abarcativa de cuenta de que ante la proliferación de tomas de tierra en zonas urbanas y suburbanas, que tuvo su epicentro en la Provincia de Buenos Aires, las [salidas negociadas](#) para dar respuestas integrales quedaron diluidas en una política hegemonizada por el criterio punitivo y la [acción represiva](#). En este sentido, por la magnitud y trascendencia, Guernica operó como caso ejemplificador respecto de [otras ocupaciones](#).

Por otra parte, si bien ha habido [otros casos](#) que pusieron en escena el problema del acceso a la tierra para producir, [el conflicto](#) que involucró a la familia Etchevere con las organizaciones que conformaron el [Proyecto Artigas](#) fue sin dudas el de mayor trascendencia de los últimos meses. La relevancia histórica de esa familia tradicional de Entre Ríos, la pertenencia de Luis Miguel Etchevehere al gobierno de Mauricio Macri, el rol de Dolores Etchevehere y la trama de negociados y actividades ilícitas que ella denuncia, lo transformaron en un hecho político de alcance nacional. De ese modo, tal como había planteado tiempo atrás con el Proyecto de Desarrollo Humano Integral General San Martín, el MTE y un conjunto de organizaciones ambientalistas colocaron en el debate público la cuestión de la concentración de la tierra en el campo y la posibilidad de llevar a cabo experiencias alternativas de producción. Si bien, la ocupación de la Estancia Casa Nueva sufrió un revés judicial, el tema tuvo eco incluso en la figura del [presidente Fernandez](#) quien avaló parte de los planteos de fondo.

Las acciones por el derecho al aborto y un nuevo tratamiento parlamentario

Durante los últimos dos meses se profundizaron las acciones callejeras y el cabildeo parlamentario y político para avanzar en el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo antes de fin de año. La legalización del aborto es un tema nodal de la agenda feminista, alrededor de cuya lucha hace dos años se produjo una movilización sin precedentes.

Desde fines de octubre, con la consigna #EsUrgente y #Aborto2020 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desarrolló distintas acciones para visibilizar la necesidad de retomar los compromisos asumidos en la ampliación de derechos hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar, con la

que se comprometió el Presidente de la Nación durante la campaña electoral y que ratificó en la apertura de sesiones legislativas este año.

La irrupción de la pandemia redefinió la agenda política del Gobierno. Desde el oficialismo hubo voces que siguieron sosteniendo que el tema sería tratado este año, pero no existía hasta ahora ninguna confirmación por parte de las autoridades del Poder Legislativo. Los sectores que se oponen a que se avance en esa discusión, alegan que en este contexto se colapsaría el sistema sanitario y que no sería atinado profundizar las divisiones. La estrategia de las iglesias evangélicas nucleadas en ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas) y de la Conferencia Episcopal Argentina es presionar para demorar el debate con el propósito de que el proyecto presentado en 2019 por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito pierda estado parlamentario y de que el proceso electoral del año próximo torne mucho más difícil que desde el Gobierno se impulse el tratamiento.

En este escenario, los primeros días de noviembre, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto convocó a una Caravana al Congreso Nacional, con acciones en distintos puntos del país. Por su parte, desde el Ejecutivo se ratificó la voluntad de avanzar en el transcurso del año con lo que reconoce como un problema de salud pública que afecta a cientos de miles de mujeres al año¹. Esto incluye garantizar condiciones sanitarias seguras para las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos, y reforzar la educación sexual integral. Asimismo, en la figura de la Secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, informó que el Ejecutivo enviaría su proyecto para que fuera tratado durante el período de sesiones extraordinarias.

Finalmente, el 17 de noviembre, Día de la militancia, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue presentado en el Congreso. La incertidumbre respecto de la letra final del mismo, en medio de fuego cruzado con sectores de poder importantes ligados a las iglesias, terminó por disiparse, con un proyecto que no tiene diferencias sustantivas con el de la propia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Presentación que estuvo acompañada por una concentración frente al Congreso convocada por la Campaña durante el 17 y 18 de noviembre.

Junto con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el Poder Ejecutivo presentó el “Proyecto de los 1000 días”, orientado a integrar intervenciones de salud y nutrición en los primeros 1000 días de vida del niño, y a fortalecer su salud y desarrollo cognitivo. Con esto, recoge los argumentos y preocupaciones expuestas por las iglesias y aliados durante el debate parlamentario del año 2018, más aún en un contexto como el actual, en el que la pobreza alcanza casi al 40% de los hogares, y afecta a más del 50% de los niños.

El posicionamiento favorable del presidente de la Nación, el Ministro de Salud, y la articulación política interministerial de mujeres en altos cargos de conducción política, así como la capacidad de movilización callejera de los feminismos, parece

¹ Por las estimaciones más serias que se han hecho, hay entre 370 mil y 520 mil abortos por año, que en la actualidad se practican en la clandestinidad. Como consecuencia de ello, tenemos entre 38 mil y 40 mil ingresos hospitalarios por abortos mal practicados

mostrar condiciones políticas inmejorables para avanzar con una demanda histórica de los feminismos. Sin embargo, la resistencia de los actores eclesiales persiste en una disputa abierta que tendrá en los próximos meses un lugar predominante en la agenda política.



tricontinental

Instituto Tricontinental de Investigación Social
*es una institución promovida por los movimientos,
dedicada a estimular el debate intelectual al servicio de
las aspiraciones del pueblo.*

www.eltricontinental.org

 @tricontinental_ar

 thetricontinental

 @tricon_es

 americalatina@thetricontinental.org